
*Documentos de Trabajo del Departamento de
Derecho Mercantil*

2012/44

Febrero 2012

LA REFORMA CONCURSAL Y LOS GRUPOS DE SOCIEDADES

JUAN SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE

MÓNICA FUENTES NAHARRO

Departamento de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho.
Universidad Complutense.
Ciudad Universitaria s/n.
28040 Madrid
00 34 -913 94 54 93
E-mail Juan Sánchez-Calero: jscalero@der.ucm.es
E-mail Mónica Fuentes Naharro: monicafuentes@der.ucm.es

<http://www.ucm.es/centros/webs/d321/>

Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://eprints.ucm.es/>

Copyright © 2012 Por los autores

LA REFORMA CONCURSAL Y LOS GRUPOS DE SOCIEDADES*

*Juan Sánchez-Calero y Mónica Fuentes***

Resumen: La reforma de la Ley Concursal ha ordenado el régimen de los llamados concursos conexos. Uno de los supuestos de este tipo de concursos es el que afecta a las sociedades integradas en un grupo de sociedades. El trabajo analiza los cambios que afectan a ese supuesto. Son modificaciones de naturaleza esencialmente procesal, sin perjuicio de la excepcional regla que se establece en materia de consolidación de inventarios y listas de acreedores.

Palabras clave: Ley concursal, reforma concursal, grupos de sociedades, concurso, consolidación.

Abstract: The Insolvency Act reform has arranged the law affecting the so called related insolvencies. One of these cases regards companies pertaining to a corporate group. This paper examines the amendments changes on that issue. There are changes which have a basic procedural nature, without prejudice to the exceptional rules on consolidation of inventories and creditors lists.

Key Words: Insolvency Act, Insolvency reform, groups, bankruptcy, consolidation.

*Texto provisional, de la ponencia que desarrollarán los autores el 15 de febrero de 2012, dentro del I Congreso Concursal y Mercantil de Salamanca, organizado los días 15 a 17 de febrero de 2012.

**Departamento de Derecho mercantil. Universidad Complutense

SUMARIO:

I.-	LOS GRUPOS, SU INSOLVENCIA Y LA LEY CONCURSAL	4
II.-	LOS GRUPOS Y LA REFORMA CONCURSAL	7
III.-	UNA REFORMA DE NATURALEZA ESENCIALMENTE PROCESAL	8
IV.-	UN RÉGIMEN DISEÑADO PARA GRUPOS Y OTROS SUPUESTOS HETEROGÉNEOS DE CONEXIÓN ENTRE DEUDORES INSOLVENTES	10
V.-	EL CONCEPTO CONCURSAL DEL GRUPO	11
	a) Una mayor seguridad jurídica	11
	b) Las dudas que plantea la consolidación	13
VI.-	LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE CONCURSOS	14
VII.-	EL JUEZ COMPETENTE	16
VIII.-	LA ACUMULACIÓN DE CONCURSOS	16
	a) Fundamento de la acumulación de concursos	16
	b) La legitimación para solicitar la acumulación	18
	c) El Juez competente para tramitar los concursos acumulados	19
IX.-	TRAMITACIÓN COORDINADA DE LOS CONCURSOS CONEXOS	21
X.-	UN APUNTE FINAL EN MATERIA DE SUBORDINACIÓN	26

I.- LOS GRUPOS, SU INSOLVENCIA Y LA LEY CONCURSAL

Desde la promulgación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), la incidencia que el régimen de la insolvencia tenía sobre los grupos de sociedades ha merecido amplia atención¹. En diversas ocasiones nos hemos ocupado de este tema, señalando los problemas fundamentales que suscita esa relación². De manera sintética cabe mencionar (i) el problema de los efectos de la declaración del concurso de una sociedad vinculada sobre el resto de integrantes del grupo, (ii) la diferenciación entre los efectos procesales (jurisdicción y competencia, acumulación, nombramiento de la administración concursal, etc.) o materiales de la declaración concursal de una o más entidades vinculadas (en especial, la llamada consolidación sustancial), y (iii) la influencia que la pertenencia a un grupo cobra para la solución del concurso.

El tratamiento correcto de esos y otros problemas suscitados por la relación entre el Derecho concursal ha de partir de una primera consideración elemental. La insolvencia de un grupo o, mejor, dentro de un grupo de sociedades, no es sino una vicisitud previsible. No estamos ante un problema extraordinario o insospechado. Si el grupo de sociedades es una realidad habitual en el tráfico, al que el ordenamiento se ve obligado a dar una determinada (aunque insuficiente) respuesta, el

¹En la bibliografía más reciente relativa a la última reforma de la Ley concursal, v., entre otros, PULGAR EZQUERRA, J., "El concurso de sociedades integradas en un grupo", en AA.VV., *La modernización del Derecho de sociedades de capital en España* (dirs. Alonso Ledesma, C. y otros), Cizur Menor (2011), p. 447 y ss.; YAÑEZ EVANGELISTA, J., "El grupo de sociedades en la Ley Concursal", en AA.VV., *Tratado judicial de la insolvencia* (dirs. Prendes Carril, P./Muñoz Paredes, A.), t. II, Cizur Menor (2012), p. 1053 y ss.

² V., SÁNCHEZ-CALERO, J., "Algunas cuestiones concursales relativas a los grupos de sociedades", ADCo nº 5 (2005), pp. 7-60 y "La insolvencia de los grupos como posible labor futura de la CNUDMI", ADCo nº 6 (2005), pp. 339-349. SÁNCHEZ-CALERO, J./FUENTES NAHARRO, M., "Grupos y concurso: las recomendaciones de UNCITRAL y el Derecho Español", Banca D'Italia - Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, nº 69 (2011), pp. 47-80 y "La insolvencia de los grupos: los trabajos de la CNUDMI y el Derecho concursal español", ADCo. nº 22 (2011), pp. 9-45.

tratamiento concursal de la insolvencia de algunos de sus integrantes o de la totalidad de los mismos no puede ser vista como un escenario plagado de circunstancias ante las que el criterio que ha de adoptarse sea, necesariamente, el de una desconfianza inicial y tendente al más severo tratamiento de esa insolvencia. Ésta depara una situación compleja, al igual que lo hacen muchos otros aspectos del funcionamiento de los grupos. Mas, complejidad no es irregularidad del supuesto, ni la justificación de un tratamiento de ese concurso sobre presupuestos generales distintos de los que se aplica ante la insolvencia de cualquier otro deudor incapaz de cumplir con sus obligaciones.

Adicionalmente, el análisis del régimen legal aplicable a la insolvencia de los grupos pasa necesariamente por establecer los límites en que debe acotarse, apartando expectativas que ignoran el concreto ámbito normativo en el que nos movemos. Esta segunda consideración trata de resaltar que, dentro del ordenamiento mercantil, el Derecho concursal no es el lugar adecuado para abordar e intentar resolver los muchos y muy complejos problemas que plantea el reconocimiento de la denominada empresa multcorporativa. Al mismo tiempo, las soluciones concursales que se intenten para los grupos se ven condicionadas por normas extra concursales, decisivas en materia patrimonial, organizativa, financiera o de imputación de responsabilidad. De forma que no cabe formular reproches al Derecho concursal por la solución dada a determinados aspectos del concurso de grupos sin tener presente la vinculación con otros sectores normativos que se proyectan sobre esa figura.

A partir de ese planteamiento, con estas páginas queremos retomar la vigencia del problema con un criterio de oportunidad. El que viene constituido por la aprobación de la reforma concursal –mediante la promulgación de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal³ (LRC)- y su incidencia en el tema que

³ Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011.

nos ocupa. Una incidencia que analizaremos con detalle pero que resultaba previsible por ser el concurso del grupo un problema normativo sobre el que se proyectaban dos factores. El primero, la realidad constante de nuestros Juzgados y Tribunales, que desde la promulgación de la LC se han visto obligados a afrontar y resolver el problema de la insolvencia del grupo o de la insolvencia dentro de un grupo. El segundo, el valioso material que desde distintas instancias internacionales se viene elaborando en relación con esa especial forma de insolvencia empresarial⁴.

Como tendremos ocasión de exponer, la reforma acierta en el tratamiento de los grupos, conforme a las consideraciones que se acaban de exponer. Lo hace porque, en primer término, contempla el concurso de grupos como un supuesto más de concursos complejos, pero posibles y habituales: los que vienen protagonizados por sujetos vinculados por relaciones de dispar naturaleza, de manera que se justifica la tramitación *conexa* de sus respectivas insolvencias. En segundo término, porque la reforma de la LC en esta materia destaca por su carácter esencialmente procesal, descartando cualquier intento de convertir sus preceptos en la puerta abierta para el tratamiento patrimonial del grupo como un sujeto único.

⁴Como se desprende de notas anteriores, una de las referencias fundamentales en el tratamiento de la insolvencia de los grupos la ofrecen los trabajos de UNCITRAL y, en concreto, de su Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia). Son trabajos que desde su inicio no han dejado de alertar sobre su complejidad: v., al respecto, MORÁN BOVIO, D., "Procedimiento (Recomendaciones 169 a 198)", en AA.VV., *Guía Legislativa de UNCITRAL sobre el Régimen de la Insolvencia* (coord. Morán Bovio), Madrid (2007), p. 174. El seguimiento de los mismos puede realizarse a través de http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/5Insolvency.html.

Especial atención merecen los trabajos desarrollados durante el 38º período de sesiones, en el que mereció atención preferente el "*Tratamiento de los grupos de empresas en situaciones de insolvencia*". Sin perjuicio de ello, permanecen abiertas cuestiones adicionales, como refleja el Informe del Grupo relativo al más reciente período de sesiones (el 40º: v. documento A/CN.9/738, pp.10-11).

II. LOS GRUPOS Y LA REFORMA CONCURSAL

La mejor evidencia del interés de la reforma concursal por el régimen del concurso de grupos la ofrece el Preámbulo de la LRC, en cuyo apartado VIII, al detallar los aspectos concretos del concurso cuyo régimen jurídico se quiere precisar, se dice: *“A la vista de la práctica acumulada, también se refuerza el régimen de los concursos conexos, en relación sobre todo con los grupos de sociedades. A este respecto se establece un nuevo capítulo III dentro del título I –por entender que tiene sustantividad suficiente para merecer un capítulo propio–, con el nombre de concursos conexos, que regula una misma cuestión, la acumulación de concursos de varios deudores, que puede producirse mediante una solicitud de declaración conjunta o mediante la acumulación de concursos ya declarados”*.

Al tratarse del criterio fundamental de la reforma, habremos de reiterar la que aquí procede formular como advertencia imprescindible. Ni la LC, ni la LRC han abordado el concurso de grupos como un supuesto específico de insolvencia. Lo que han hecho es incluir este supuesto en el más amplio de los denominados concursos conexos, formulando de manera prioritaria reglas generales (declaración, acumulación, nombramiento de la administración concursal, etc.) y, de forma excepcional, reglas sustantivas o patrimoniales (por ejemplo la subordinación). La LRC ha ordenado la dispersión de reglas que en este ámbito incluía a la LC y las ha completado con algunas nuevas disposiciones⁵.

La solución ha sido simple y clarificadora: la enuncia el apartado dieciocho del artículo único de la LRC y consiste en una agrupación

⁵ V. VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Guía legislativa de la Ley concursal. Texto comparado y comentado, según la reforma de la Ley 38/2011*, Barcelona (2011), p. 411 y AYALA CANALES, C.G., “El tratamiento de los grupos en la reforma de la Ley Concursal”, disponible en www.legaltoday.com/files/File/pdfs/El-tratamiento-de-los-grupos.pdf.

sistemática de las reglas aplicables a los concursos conexos dentro del nuevo capítulo III del título I de la LC. Este capítulo lo integra el renovado artículo 25 LC, al que se añaden dos nuevos preceptos (los artículos 25 bis y 25 ter). Junto a ello, encontramos en la LC referencias aisladas a la incidencia que en un concurso tiene la existencia de un grupo de sociedades vinculado con el deudor.

III.- UNA REFORMA DE NATURALEZA ESENCIALMENTE PROCESAL

Sin perjuicio de que posteriormente analicemos de forma detallada los concretos cambios, ha de sentarse también como consideración preliminar que la reforma no altera el enfoque normativo de la LC en esta materia, de forma que no puede enarbolarse como un paso a favor de una aplicación del régimen concursal a los grupos distinta de la resultante de la situación previa a la reforma. Lo que pretendemos destacar es que persiste en torno a los grupos de sociedades la pulsión entre lo que la norma establece y lo que determinados intereses pueden reclamar de su aplicación. Con seguridad, la invocación de la reforma concursal será utilizada por determinados acreedores o administradores concursales para proponer “*soluciones*” al concurso de sociedades vinculadas. Soluciones que, sin embargo, un estudio de la reforma hace evidente que no se han adoptado. No persigue la LRC soluciones patrimoniales o sustantivas en materia de grupos. Su preocupación es esencialmente procesal.

Es sabido que uno de los problemas fundamentales en el tratamiento de los grupos es el de su eventual consideración como una unidad patrimonial. De prosperar esa consideración unitaria, el concurso de un grupo no plantearía mayores problemas en cuanto a la delimitación de su objeto. Mas esa consideración dista mucho de poder ser admitida, ante la vigencia de la personalidad jurídica de cada una de las sociedades pertenecientes a un mismo grupo. A pesar de ello, llegados al ámbito

concursal, son diversos los intereses que confluyen en sentidos opuestos sobre las consecuencias del concurso de una o más sociedades integradas en un grupo. Determinados acreedores de sociedades insolventes encontrarán en la atracción global del conjunto del grupo al concurso una más probable satisfacción de sus créditos. Por el contrario, los acreedores de las integrantes solventes del grupo, en coincidencia con sus accionistas y socios, se opondrán a esa solución, con un fundamental argumento: falta el presupuesto objetivo para que se declaren en concurso a sus sociedades y el grupo no puede ser reconocido como protagonista del procedimiento de insolvencia. Ésta última es la regla general que ha de imperar, que admite excepciones, como luego veremos.

Nada existía en la LC y nada aparece en la LRC que altere esa situación. En rigor, no cabe el concurso del grupo, sin perjuicio de la utilización generalizada de tan equívoco término⁶. Porque lo que afrontamos no es la insolvencia de una empresa policorporativa y carente de personalidad jurídica, sino que lo que da lugar a un concurso conexo es la simultánea o próxima insolvencia de dos o más sociedades que “*formen parte de un grupo de sociedades*”. A partir de ahí, la LRC se ha ocupado de dictar normas con un cariz esencialmente procesal. Ya sea para contemplar esa conexión desde un momento inicial del procedimiento –a través de la declaración conjunta de concurso de las sociedades vinculadas e insolventes- o en un estadio posterior –mediante la acumulación- de concursos ya declarados. Cualquiera de esas previsiones apunta a la que constituye justificación principal del régimen legal: facilitar la tramitación coordinada de esos concursos.

⁶Como un supuesto extraordinario, que supondría la implicación concursal de todo grupo, se viene planteando el de una sociedad dominante y todas sus filiales, sociedades unipersonales; v., por todos, PULGAR, J., “El concurso de sociedades integradas en un grupo”, *cit.*, nota 9, p. 454.

Ese propósito es lógico y loable. La vinculación societaria provoca con frecuencia relaciones de naturaleza patrimonial y funcional entre las sociedades que la protagonizan. Entre otras, en su financiación (avales, gestión de tesorería, financiación centralizada, etc.) o en su funcionamiento (políticas de identificación del grupo, de aprovisionamiento, de estructuras de capital y sistemas de gestión, etc.). Cuando dos o más de esas sociedades son declaradas en concurso, las vinculaciones existentes tienen una singular influencia en la tramitación coordinada y en las soluciones de sus respectivas insolvencias, de manera que es no ya razonable, sino con frecuencia obligado que entre ambos concursos exista una coordinación imprescindible.

IV.- UN RÉGIMEN DISEÑADO PARA GRUPOS Y OTROS SUPUESTOS HETEROGÉNEOS DE CONEXIÓN ENTRE DEUDORES INSOLVENTES

Formulada esa advertencia sobre el alcance esencialmente procesal de la reforma que nos ocupa, ha de alertarse además de la limitación que la regulación común a los concursos conexos comportapara la específica insolvencia de un grupo o de sociedades vinculadas. Estamos ante normas comunes a situaciones formal y materialmente distintas. El nuevo Capítulo III del Título I de la LC no regula la insolvencia de los grupos, sino la de aquellos sujetos que puedan presentar una conexión de naturaleza heterogénea. El concurso conexo contempla, como vemos supuestos típicos y otros meramente fácticos: entre otros, la insolvencia de los cónyuges, los integrantes de una pareja de hecho, la sociedad y sus administradores o socios o la de dos o más sociedades pertenecientes a un mismo grupo (v. arts. 25, 25 bis, LC). Su simple enunciación invoca realidades patrimoniales divergentes y refuerza la necesaria cautela a la hora de interpretar la nueva ordenación de los concursos conexos como una disciplina orientada a facilitar la tramitación del procedimiento, sin convertirla en fuente de responsabilidad patrimonial conjunta de los deudores implicados.

V.- EL CONCEPTO CONCURSAL DEL GRUPO

a) Una mayor seguridad jurídica

El grupo como realidad empresarial es objeto del ordenamiento jurídico desde una pluralidad de perspectivas. Tanto en el ordenamiento mercantil como en otros sectores del ordenamiento (tributario, administrativo, etc.) que proyectan su atención sobre la denominada empresa policorporativa. La finalidad de la norma en cada uno de esos casos es diversa, pero comparten la necesidad sistemática de comenzar por la definición de lo que constituye un grupo de sociedades. Esa definición es el presupuesto del correspondiente sistema legislativo y encuentra una explícita y habitual formulación en la indicación de que la correspondiente determinación del grupo se establece “*a los efectos de esta Ley*”. Es un reconocimiento de la variedad de situaciones que permiten determinar la existencia de un grupo, a la vez que se adopta un presupuesto imprescindible para cualquier disciplina que basa su ámbito de aplicación, entre otros, en un presupuesto subjetivo. Si los grupos aparecen como un sujeto trascendente a los efectos de la aplicación del régimen de la insolvencia, definir lo que es un grupo es una exigencia que parte de la más elemental seguridad jurídica.

Nuestro Derecho concursal carecía de una delimitación de tal naturaleza⁷. Situación que ha quedado superada con la fácil solución consistente en incorporar el concepto del que parte la consolidación contable. El apartado ciento catorce del artículo único de la LRC añade una

⁷No se trata de proclamar lo obvio, sino de destacar una ventana abierta a la inseguridad jurídica: v. SÁNCHEZ-CALERO, J., “Algunas cuestiones concursales relativas a los grupos de sociedades”, *cit.*, pp. 24-25 y SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M., “El concepto de grupo en la Ley Concursal”, en AA.VV., *Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia*, vol. II, Madrid-Barcelona (2005), p. 2314.

disposición adicional sexta a la LC⁸ con el siguiente tenor: “A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio”. Puede discutirse si estamos, en rigor, ante una definición concursal de lo que constituye un grupo de sociedades. Porque tal definición no existe, sino que lo que se hace es una mera adopción de la que de ese concepto aparece en el CCo y en el marco de la consolidación contable. Por lo tanto, estamos ante una delimitación del grupo que se orienta a facilitar la formulación por una de las sociedades del grupo (a la que se atribuye esa condición de sociedad dominante) de “*las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados*” ¿Es esa solución la idónea desde la perspectiva concursal? La respuesta a esa cuestión no nos parece que sea lo decisivo. Lo relevante es facilitar a quienes han de interpretar y aplicar la LC un asidero cierto a la hora de determinar cuándo se está ante un grupo y, por lo tanto, cuándo entran en juego las normas reguladoras de los concursos conexos y otras que dentro de dicha norma toman en consideración la existencia del grupo.

La solución adoptada debe ser corregida en cuanto a que esa incorporación del concepto del art. 42 CCo se hace a los efectos de esa “Ley” concreta y con mayúscula, es decir, de la LC. Una solución que debe ser bienvenida por aportar seguridad jurídica en un aspecto decisivo como es el presupuesto subjetivo del que depende la aplicación de un conjunto heterogéneo de disposiciones concursales, que arrancan desde la iniciación del mismo y llevan hasta su conclusión. Esto es lo importante y constituye un acierto de la reforma.

Es cierto que, como se señaló antes, el concepto de grupo que resulta del art. 42 CCo nació en el ámbito contable, pero no resulta menos notorio

⁸ Cabe compartir la crítica sobre la ubicación de tan relevante definición concursal; v. al respecto AYALA CANALES, “El tratamiento de los grupos”, *cit.*, p. 3. Desde un punto de vista sistemático, pudiera resultar más esclarecedor añadir esa definición como párrafo final del nuevo art. 25.1 LC, que es el primer precepto en el que se aborda la posibilidad del protagonismo de un grupo dentro de la disciplina de los concursos conexos.

que ha terminado convirtiéndose en el concepto dominante, principalmente por su acogimiento creciente por diversas leyes especiales (mercantiles o de otra naturaleza). El resultado incuestionable es de una mayor seguridad jurídica, al descartarse que un concepto decisivo para la regulación concursal –la delimitación normativa de un sujeto al que se otorga protagonismo en los concursos conexos- pueda verse sometido a criterios diversos. Además, tal seguridad se ve fortalecida por la plena coincidencia en la delimitación del concepto de grupo por la LC en coincidencia con normas mercantiles próximas, como las contables (el propio art. 42 CCo), las societarias (v. el art. 18 LSC), las del mercado de valores (art. 4 LMV) y otras de distinta naturaleza, pero que comparten con la normativa de la insolvencia la tutela de intereses generales o colectivos.

b) Las dudas que plantea la consolidación

Junto a la adopción de lo que constituye un grupo “*a efectos concursales*”, la reforma ha corregido otro defecto de la normativa precedente. En el derogado art. 3.5 LC, la aplicación de determinadas disposiciones se hacía depender no sólo de la existencia de un grupo, sino de la simultánea concurrencia de dos circunstancias de hecho: la “*identidad sustancial de (sus) miembros*” y la “*unidad en la toma de decisiones*”. No es cuestión de repetir aquí las críticas que tal previsión mereció a partir de la inseguridad que comportaba con respecto al grupo, pero sí de alertar sobre lo que su mantenimiento puede implicar con respecto a cuestión tan sustantiva como la de someter la excepcional posibilidad de consolidación de concursos de integrantes de un mismo grupo a la constatación imprescindible de ambas circunstancias. De ello nos ocupamos más ampliamente al final de esta contribución. Sin perjuicio de ello, quede señalado que tan decisivo aspecto del concurso dentro del grupo no dependerá sólo de la simple aplicación de la definición legal de lo que es el grupo, sino también de la apreciación de esas situaciones de hecho.

VI.- LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE CONCURSOS

Como se indicó, la reforma concursal no ha dado lugar a una regulación específica del concurso de grupos, sino a referencias a ese caso dentro del régimen de los denominados concursos conexos. Por tal ha de entenderse el concurso que, sobre la base de vínculos de distinta naturaleza, ha de contemplarse la tramitación conjunta de la situación de insolvencia que concurre simultáneamente en varios deudores vinculados. Los concursos conexos pueden ser aquéllos que se plantean con respecto a vínculos de naturaleza personal o matrimonial, como sucede en caso de cónyuges o parejas de hecho, así como con relación a las vinculaciones societarias, que son las relevantes a los efectos del concurso del grupo. El concurso de todo el grupo de sociedades no es la hipótesis a analizar. Lo es el concurso de varias entidades que forman parte de un mismo grupo de sociedades. Éste es el supuesto que enuncia, junto a otros casos de grupos conexos, el art. 25.1 de la LC. La idea principal que anima ésta y otras soluciones en la norma reformada es la de que la existencia del grupo se contemple en momentos y trámites decisivos del procedimiento concursal.

La primera contribución normativa que se hace con respecto a los concursos conexos es lógica desde el punto de vista sistemático, pues atiende al momento inicial del concurso. Todo concurso conexo admite la posibilidad de que su declaración reproduzca el sistema general, es decir, que esa declaración se traduzca en un concurso voluntario o en un concurso necesario en función de quien solicita la declaración judicial. Así, el art. 25.1 LC contempla la hipótesis del concurso conexo voluntario. Éste se da cuando la declaración judicial conjunta de concurso la solicitan varias sociedades que forman parte de un mismo grupo. Se plantea aquí una variedad de hipótesis puesto que, para empezar, podemos cuestionar en qué medida tiene validez esa declaración cuando

la plantean simultáneamente sociedades que se encuentran en estados distintos, es decir, aquéllas que pueden tener una situación de insolvencia efectiva y otras de insolvencia inminente. Mas esa disparidad no sólo es previsible en un grupo, sino que es una de las justificaciones fundamentales para proponer una conjunta declaración de sociedades vinculadas, a pesar de que unas ya se encuentren en un actual estado de insolvencia, mientras que otras, lo contemplan como inminente (cfr. art. 2.3 LC). Pues es la evidencia empírica la que señala que lo que conocemos como concurso de un grupo deriva con frecuencia del contagio de las dificultades o incapacidades entre sus integrantes. Los ejemplos son muchos y variados y acreditan que en estructuras jurídicas y de centralización financiera, el concurso de la sociedad dominante o el de aquellas filiales de las que depende la financiación, el aprovisionamiento o cualquier otro aspecto fundamental para la actividad de las demás sociedades alcanza más pronto que tarde a éstas. La declaración conjunta del concurso de todas –las que son insolventes y las que prevén que lo serán– se corresponde con la finalidad del procedimiento de insolvencia y con la mejor tutela de todos los intereses afectados.

La principal novedad que resulta de la reforma es procesal y atiende a la legislación para solicitar la declaración conjunta. Mientras que el art. 3.5 LC (derogado) atribuía esa facultad al acreedor, el art. 25.1 LC autoriza esa solicitud a las sociedades deudoras vinculadas. Siendo procesal, la medida adoptada cobra significación para todo el desarrollo del concurso, en cuestiones de tramitación (coordinación de trámites, informes y secciones), pero también de solución (el inicio conjunto del concurso facilita el planteamiento inicial de una solución convencional que contemple las relaciones de grupo desde el primer momento).

La segunda hipótesis la aborda el art. 25.2, conforme al cual, el acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de dos sociedades que formen parte del mismo grupo. El presupuesto lo

establece de una manera clara el mismo precepto: que el acreedor solicitante lo sea de ambas entidades deudoras.

VII.- EL JUEZ COMPETENTE

El Juez competente para la declaración de concurso se dice que será aquél donde se encuentre el centro de los intereses principales de la sociedad dominante. Allí donde el concurso se solicite para dos sociedades pertenecientes a un mismo grupo sin que podamos atribuir la condición de dominante a ninguna de ellas, será el pasivo de las distintas sociedades el que determine la competencia judicial. El art. 25.4 LC dice que será Juez competente aquél que corresponda al centro de intereses principales de la sociedad que tenga un mayor pasivo. Mientras que la valoración de ésta circunstancia no debiera plantear mayor problema, la determinación de cuál es su centro principal de intereses mantiene una complejidad que la práctica concursal se encarga de ilustrar⁹.

VIII.- LA ACUMULACIÓN DE CONCURSOS

a) Fundamento de la acumulación de concursos

La siguiente previsión normativa hace referencia a la ya conocida y razonable solución consistente en la acumulación de concursos. En este

⁹La definición concursal de ese concepto se realiza a partir de una presunción con respecto a las personas jurídicas en concurso: “*que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social*” (art. 10.1, párrafo segundo LC). Criterio que ha de ponderarse a la vista de los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la determinación del domicilio social.

Desde una perspectiva internacional, la interpretación de conceptos relacionados con el concepto de centro de los principales intereses se mantiene en el centro del debate: v. UNCITRAL, Grupo V, *Informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor realizada en su 40º período de sesiones*, pág. 4 y ss., en especial, la referencia sobre futuros trabajos en p. 11.

caso, se ha sistematizado este supuesto de naturaleza esencialmente procesal en el nuevo art. 25 bis LC. El concurso de entidades que formen parte de un grupo de sociedades aparece como el primero de los supuestos que el art. 25 bis.1 LC, enuncia como susceptibles de solicitud de acumulación. Al igual que pudiera predicarse de cualquiera de las reglas aplicables a los concursos conexos, en materia de acumulación no debe dejar de alertarse sobre la diversidad de situaciones que contempla el art. 25 bis.1 LC como supuestos acumulables que somete a un mismo régimen. Para no extendernos en esta advertencia, bastará con una obviedad: el análisis de la acumulación de los concursos de dos cónyuges ofrece pocos elementos coincidentes con el que se refiere a dos o más sociedades pertenecientes a un mismo grupo.

Si la anterior observación resalta la importancia de la valoración que el Juez debe hacer de la posible acumulación, otro tanto sucede si nos detenemos en cuál es el fundamento de la acumulación de concursos y lo hacemos poniendo en relación la sucinta previsión concursal, con la disciplina general que en materia de acumulación de procesos establecen los artículos 74 y siguientes LEC. La acumulación concursal no se reduce a la genérica terminación de los distintos procesos *“por una sola sentencia”*, como proclama el art. 74 LEC, sino a fomentar que la conexión funcional o patrimonial que existe entre los protagonistas de diversos concursos ya iniciados, se traduzca en una coordinación procedimental que implique la más correcta ponderación de los múltiples, variados y contradictorios intereses afectados por la solución de esos concursos. De poco sirve plantear un convenio a los acreedores de una sociedad si su actividad depende principalmente de la continuidad de otra sociedad del grupo cuya insolvencia apunta a la liquidación. A esa consideración funcional se ha de añadir la que resulta de la complejidad procedimental de todo concurso, que en el caso de deudores vinculados e insolventes, recomienda acompasar la tramitación de sus respectivos concursos.

Ambas consideraciones sirven para justificar por igual la decisión de acumular o no. Porque la LC no determina que la acumulación ha de acordarse en todo caso (al igual que no lo hace, con carácter general, la LEC), sino que es una posibilidad que queda en manos del Juez y que reclama una cuidada ponderación de las circunstancias que se aleguen en uno u otro sentido. Tal es el motivo que lleva a someter a cualquiera de los legitimados para formular la solicitud de acumulación a hacerlo mediante un “*escrito razonado*” (art. 25 bis.1 y 2 LC). Razones que permitirán al Juez que ha de resolver sobre la solicitud de acumulación – aquél ante el que viniere tramitando el concurso más antiguo (art. 79 LEC)- valorar sobre su procedencia o improcedencia, cuestión que casi nunca es pacífica, como se encargan de expresar con frecuencia las alegaciones de deudores, acreedores y administradores concursales presentes en los distintos concursos susceptibles de ser acumulados. En el caso de los grupos, la decisión sobre la acumulación puede verse afectada por una considerable variedad de argumentos sustantivos y procesales, así por la difícil graduación de una pluralidad de intereses que se verán concernidos en uno y otro caso. El criterio decisivo lo ofrece, en todo caso, el artículo 25 ter LC: la acumulación debe servir al objetivo de hacer posible la tramitación coordinada¹⁰ de los concursos a los que afecte.

b) La legitimación para solicitar la acumulación

Los legitimados para solicitar la acumulación son cualquiera de las entidades concursadas que tienen una situación de vinculación entre ellas o los administradores concursales ya designados. Se establece como requisito que la solicitud esté debidamente razonada porque, como sabemos, esta solución procesal tiene que tener una justificación en el favorecimiento de la tramitación de los distintos concursos conexos.

¹⁰ v. *infra* IX.

De manera residual, el art. 25 bis.2 LC permite la legitimación para solicitar la acumulación a cualquiera de los acreedores. La fórmula utilizada puede dar a entender que cualquier acreedor de una sola de las sociedades vinculadas tiene posibilidad de solicitar la acumulación del Juez cuando no lo hubieran hecho ni los concursados ni la administración concursal.

c) El Juez competente para tramitar los concursos acumulados

La acumulación siempre plantea problemas en cuanto a cuál debe de ser el Juzgado, que de entre los que estuvieran conociendo de distintos concursos de sujetos vinculados, debe tramitar finalmente el proceso acumulado. Comienza el art. 25 bis.3 LC advirtiéndolo que procede la acumulación allí donde la declaración de concurso de tales sujetos (relacionados por vinculaciones de naturaleza diversa) se haya llevado a cabo por diferentes Juzgados. En la resolución que acuerde la acumulación, corresponde determinar quién será el Juez, de entre los varios que venían tramitando esos concursos que han quedado refundidos, que deberá llevar a cabo la tramitación acumulada. Nos encontramos con que en materia de grupos de sociedades los criterios son varios. Así, se dice que será Juez competente el que hubiere conocido del concurso de la sociedad dominante, quedando acumulados a éste los demás concursos ya declarados de sociedades vinculadas.

Es en lugares como el que nos ocupa en donde se refleja la relevancia de la acertada adopción –aunque sea por referencia– de un concepto concursal de lo que constituye un grupo. Porque sociedad dominante será aquella que venga formulando las cuentas consolidadas (art. 42 CCo). Es cierto que puede existir una relación de grupo carente de esa expresión contable, pero será un supuesto menos frecuente y más dudoso, que como veremos no se ha querido que contamine el régimen de la acumulación.

Para el supuesto de que no hubiera sido la sociedad dominante la protagonista de ninguno de los concursos ya tramitados, la redacción del art. 25 bis.3 abona alguna incertidumbre. En primer lugar, porque cabe plantear si es aplicable a los grupos el criterio general de atribución de la competencia en materia de acumulación de concursos conexos: será competente el Juez que estuviera conociendo del concurso de aquella sociedad vinculada “*con mayor pasivo*” en el momento de la respectiva presentación de la solicitud de los respectivos concursos. Un criterio que no deja de provocar algún recelo en situaciones en las que, como es el caso de los grupos, no cabe descartar las transmisiones de deudas en la fase preconcursal con propósitos de mera orientación del proceso, como ante una hipotética acumulación. Por esas u otras razones, parece que la sistemática del precepto en cuestión ha establecido la regla del mayor pasivo para los otros concursos conexos, mientras que en el caso de los concursos de sociedades de un mismo grupo, los criterios son sólo dos. El que ya se ha expuesto y el que a continuación se analiza.

El inciso final del art. 25bis.3 LC establece que el criterio de competencia judicial vendrá dado a favor del Juez que hubiera conocido en primer lugar del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo. Desaparece por tanto el criterio del mayor pasivo como el determinante para la atribución de competencia, que cede a favor del criterio de prioridad, conforme al cual, los procesos más modernos deberán acumularse al más antiguo. Se trata del criterio general en materia de acumulación, establecido en el art. 79.2 LEC. Un criterio cierto, pero al que se formulan reproches a partir de que su inspiración no puede resultar coincidente con el objetivo de la tramitación coordinada que anima la disciplina de los concursos conexos¹¹ y que, desde luego, es lo deseable en el caso de los grupos de sociedades.

¹¹ AYALA CANALES, “El tratamiento de los grupos”, pp. 5-6.

IX.- TRAMITACIÓN COORDINADA DE LOS CONCURSOS CONEXOS

La última disposición en materia de concursos conexos la encontramos en el art. 25 *ter* LC, cuya rúbrica, adelantamos ya, resulta equívoca. Tal precepto está orientado a la “*tramitación coordinada de los concursos*”, pero su contenido tiene un significado que puede ir mucho más allá del estrictamente procesal.

En el apartado primero de este precepto se establece, como una suerte de principio general, que los concursos que se hubieren declarado conjuntamente o que hubieren sido objeto de acumulación “*se tramitarán de forma coordinada*”. Coordinación que es en sí misma la idea principal para favorecer que ya desde el primer momento inicial o bien en un momento posterior, los concursos de deudores vinculados sean objeto de una tramitación común. La coordinación supondrá que cada concurso seguirá sustanciándose de forma individual pero procurando que su tramitación avance de forma paralela, hipótesis que permite imaginar un amplio catálogo de situaciones de las que aquí no podemos ocuparnos¹².

Mas lo relevante desde el punto de vista sustantivo del apartado primero del art. 25 *ter* LC no es tanto lo que declara como regla general, como lo que se descarta, porque apunta a lo que ha sido el principal objeto histórico de debate en torno al concurso del grupo de sociedades. Sabido es que uno de los problemas principales que plantea el grupo para el Derecho mercantil es su consideración como una unidad de decisión y como unidad patrimonial. Pues bien, en contra de esta última consideración opera la tajante advertencia que cierra el art. 25 *ter*.1 LC, cuando se dice que la declaración conjunta o la acumulación de

¹²Al respecto, v. ALONSO-CUEVILLAS, J., “Aspectos procesales de la reforma de la Ley Concursal Ley (38/2011)”, RCP nº 16, (2012), p. 43 y ss.; también cabe citar las reflexiones sobre las implicaciones procesales de una potencial acumulación sustantiva de concursos: YÁÑEZ EVANGELISTA, J., “El grupo de sociedades en la Ley concursal”, *cít.*, p. 1053 y ss.

concursos de sociedades pertenecientes a un mismo grupo, “*se llevará a cabo sin consolidación de las masas*”.

La consolidación patrimonial o de masas es un instituto jurídico que carece de tradición en nuestro ordenamiento. El precepto transcrito incorpora un término acuñado en otros países –concretamente, en los Estados Unidos, de donde es originario y se denomina *substantive consolidation*- en donde se hablaba de esa consolidación patrimonial o sustancial para abrir la puerta a la posibilidad de integrar en un tratamiento unitario de las masas activa y pasiva de distintas sociedades pertenecientes a un mismo grupo e implicadas en un mismo procedimiento de insolvencia¹³.

Pues bien, frente a la pretensión que muchas veces se plantea en tantos procedimientos y que desde el punto de vista normativo también han defendido no pocas opiniones, la Ley descarta expresamente en el art. 25 *ter*.1, la posibilidad de entender que, por sí misma, la tramitación conjunta de concursos conexos puede dar lugar a la pretensión de tratar de una manera unitaria o consolidada la masa activa o pasiva de las distintas sociedades en concurso.

Sin embargo, esta regla general que explicita el alcance exclusivamente procesal de la tramitación coordinada de los concursos se ha visto atenuada por el –críptico- contenido del apartado segundo del mismo precepto. En éste se ha introducido una excepción o una matización -en función del alcance que se otorgue a la interpretación de este precepto- a aquella exclusión tajante de la consolidación sustantiva de las masas, cuando se dice que “*de forma excepcional, podrán consolidarse inventarios y listas de acreedores*”.

¹³ Sobre esta institución v. FUENTES NAHARRO, M., *Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)*, Cizur Menor (2007), p. 490 y ss.; SÁNCHEZ-CALERO, J./FUENTES, M., “La insolvencia de los grupos: los trabajos de la CNUDMI y el Derecho concursal español”, *cit.*, p. 9 y ss., en especial, 39 y ss.

Como ya adelantamos, esta afirmación resulta equívoca y podría interpretarse como una “*puerta abierta*” a la aplicación de la consolidación sustancial en el seno de los grupos. De hecho, a pesar del escaso tiempo que lleva en vigor la reforma, ya diversos autores han defendido esta interpretación¹⁴, esto es, concebir el art. 25^{ter}.2º como una posibilidad de consolidar -con el carácter “*excepcional*” que exige la norma- las masas activas y pasivas de las diferentes sociedades concursadas como si de un solo deudor se tratara. En definitiva, ello supondría aplicar en el seno del concurso, aun cuando no en base a los mismos presupuestos -como más adelante apuntaremos- la doctrina del levantamiento del velo ya preconizada por alguna resolución judicial cercana¹⁵.

Los presupuestos de aplicación de esta excepcional medida, tal y como vienen recogidos en el artículo 25^{ter}.2º serían los siguientes: (i) en primer lugar, que exista confusión de patrimonios entre las sociedades en cuestión, lo que viene a recoger la línea propuesta por UNCITRAL (recomendación 220)¹⁶; (ii) en segundo lugar, que la confusión sea de tal

¹⁴VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Guía legislativa de la Ley concursal. Texto comparado y comentado, según la reforma de la Ley 38/2011*, cit., p.280, quien entiende que la norma supone aplicar con carácter excepcional la consolidación de masas activas y pasivas cuando sea imposible, o desproporcionado, deslindar claramente las de cada uno de los diferentes concursos; YÁÑEZ EVANGELISTA, J., “El grupo de sociedades en la Ley concursal”, en *Tratado Judicial de la Insolvencia*, II, 2011, cit. p. 1092: esto “*significa la generación de una masa activa y pasiva en la que se integrarán todos los bienes y derechos de las sociedades concursadas y que servirán para la satisfacción de los acreedores de cualquiera de las sociedades*”; DÍAZ MORENO, A., “Los concursos conexos”, octubre 2011, p. 5, en www.gomezacebo-pombo.com y ALONSO-CUEVILLAS, “Aspectos procesales de la reforma de la Ley Concursal (Ley38/2011)”, cit., p. 51.

¹⁵V., como referencia destacada, la aplicación que ya venían haciendo nuestros tribunales de la aplicación del levantamiento del velo en el concurso de sociedades de grupo en la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 28 de junio de 2011; JUR 2011/359899.

¹⁶ Por esta razón, algunos autores han propuesto acudir a la Guía Legislativa de la CNUDMI como criterio interpretativo del concepto de “confusión de patrimonios”: YÁÑEZ EVANGELISTA, J., “El grupo de sociedades en la Ley concursal”, cit., p. 1089. Sobre los trabajos de la CNUDMI a ese respecto, v. SÁNCHEZ-CALERO, J.,/FUENTES

gravedad que imposibilite discernir la titularidad de activos y pasivos si no es incurriendo en un coste o un retraso en el procedimiento desproporcionado o excesivo¹⁷.

Dicho esto, habría que realizar dos apuntes relevantes en cuanto a los presupuestos de aplicación del art. 25^{ter}.2ºLC. En primer lugar, hay que subrayar que la norma –a diferencia de lo que viene ocurriendo en la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo– prescinde de todo elemento subjetivo relativo a la intención fraudulenta (fraude de ley) o abusiva (abuso de derecho) por parte del deudor/es respecto de los derechos de terceros. En segundo lugar, es necesario tomar en consideración que existe un tercer presupuesto objetivo al que la norma no hace referencia (porque se halla implícito, en tanto lo es, a su vez, de los concursos conexos en general *ex arts. 25, 25bis y 25.ter* 1º LC)¹⁸, cual es que la consolidación se predica únicamente respecto de sociedades concursadas (*ergo* insolventes), en ningún caso puede interpretarse la norma como una posibilidad de extender el concurso a sociedades *in bonis* del mismo grupo.

Pues bien, aun constatando que la opinión mayoritaria de los autores que se han manifestado sobre el alcance del art. 25 *ter*. 2º LC lo hacen en términos de consolidación patrimonial o sustantiva, nos parece que, con todo, interpretaciones discordantes por parte de nuestros tribunales y doctrina científica son de esperar en tanto, a nuestro juicio, es

NAHARRO, M., “La insolvencia de los grupos: los trabajos de la CNUDMI”, *cit.*, p. 39 y ss.

¹⁷YÁÑEZ EVANGELISTA, J., “El grupo de sociedades en la Ley concursal”, *cit.*, p. 1089, quien también señala que se impone por el legislador un “*alcance cualitativo*” a esa confusión. La referencia al coste, se ha dicho, se hará en relación con la masa activa y el mayor o menor grado de satisfacción de los acreedores por lo que el gasto siempre habrá de ser proporcional al importe de la masa activa. Lo mismo cabe decir de la demora (*idem*. p. 1089).

¹⁸ Recordemos que la declaración conjunta, la acumulación y la tramitación coordinada que ambas situaciones conllevan requieren que concurra el previo presupuesto objetivo (cfr. art. 2 LC) de la declaración de concurso de las sociedades que se ven atraídas a esa coordinación procedimental.

cuestionable que la intención del legislador a la hora de incluir la mención del art. 25 *ter.* 2º LC fuera la de otorgarle el alcance material que se le viene atribuyendo. Existen razones que justificarían otra línea interpretativa más matizada, cual es, que el propio legislador ha querido limitar claramente el alcance de esa consolidación de inventarios y listas de acreedores (de carácter “contable”)¹⁹ admitiéndola exclusivamente “*a los efectos de la elaboración del informe de la administración concursal*”. La limitación establecida por la norma recurriendo a la consabida expresión “*a los efectos de*” permitiría colegir que con este precepto el legislador, sencillamente, ha tratado de facilitar la labor de la administración concursal respecto a un fin temporal y objetivamente delimitado: la tarea de elaborar el informe.

No obstante lo dicho, esta interpretación –hasta aquí, a nuestro juicio, correcta– exigiría que, una vez elaborado el informe con los inventarios y listas de acreedores “*consolidados*”, la administración concursal debería proceder al “*deslinde*” que *a priori* se había planteado como demasiado costoso o dilatado; exigencia ésta –en cuanto a tiempo y costes para la exigua masa activa– que quizá se interprete como excesiva por nuestros tribunales, quienes, presumiblemente, se decanten por la primera línea interpretativa expuesta: la de la incorporación de la institución de la consolidación sustancial de masas a nuestro ordenamiento concursal.

Caso de ser así, no se debe olvidar nunca que ésta es una medida de carácter absolutamente excepcional. Nuestros tribunales no pueden –no deben– obviar un hecho que viene siendo el centro argumentativo de las críticas a la institución de la consolidación sustancial –reconocido tanto por sus detractores, como sus defensores–, cual es el de que su adopción, en contra de lo que pudiera parecer apriorísticamente, no siempre es la fórmula más tuitiva para los acreedores de las distintas sociedades involucradas, ya que desde el punto de vista de los intereses en juego

¹⁹PULGAR EZQUERRA, J., “El concurso de sociedades integradas en un grupo”, *cít.*, p. 458.

comporta un cambio radical en sus expectativas de satisfacción, mejorando las de aquéllos deudores en peor situación económica y empeorando, en términos relativos, las de los acreedores de los concursados con mejor situación²⁰.

En cualquier caso, a la espera de la interpretación judicial del alcance (procesal o material) de este segundo apartado del art. 25 *ter*.2º LC, sigue latente la duda sobre si la regla general y su excepción constituyen o no, un escenario nuevo para nuestros Tribunales.

X.- UN APUNTE FINAL EN MATERIA DE SUBORDINACIÓN

Al concurso de sociedades vinculadas por su pertenencia a un mismo grupo afecta un último punto dentro de la reforma concursal. Se trata de una innovación que cobra relevancia en materia de subordinación crediticia y a partir de la consideración de quiénes son personas especialmente relacionadas con el concursado. Se trata de una materia plagada de incertidumbres²¹, si bien la solución que comentamos clarifica alguna de las dudas que se habían venido repitiendo con respecto a la subordinación de créditos correspondientes a otras sociedades y socios integrados en el mismo grupo del deudor en concurso.

Para explicar la cuestión es preciso recordar la subordinación como consecuencia de la relación establecida entre distintos preceptos de la LC. Así, con anterioridad a la reforma, el juego del art. 92,5º LC con relación a lo establecido en el art. 93.2, apartados 1º y 3º de la LC, daba

²⁰ En este sentido también la Guía Legislativa de UNCITRAL: al respecto, v. SÁNCHEZ-CALERO, J./FUENTES, M., "La insolvencia de los grupos", *cit.*, p. 9 y ss., en especial, 39 y ss.; de ahí que hayan de valorarse con cautela los pros y los contras de una unificación de masas: DÍAZ MORENO, A., "Los concursos conexos", *cit.*, p. 5.

²¹ V. la reciente contribución de MAIRATA LAVIÑA, J./ROLDAN SANTÍAS, F., "Subordinación y grupos de empresas: cuestiones interpretativas", RCP 16 (2012), p. 227 y ss.

lugar a un amplio número de acreedores subordinados dentro del grupo, puesto que tal consideración la merecían tanto las demás sociedades pertenecientes al mismo grupo, así como los socios de cualquiera de ellas que ostentaran participaciones significativas (más del 5% del capital en sociedades cotizadas y más del 10% en las demás sociedades), en el momento del nacimiento del crédito.

La reforma concursal en este punto se ha limitado a una nueva redacción del número 3º del art. 93.2. Ha restringido el grupo de acreedores subordinados en función de esa vinculación con la sociedad insolvente. Mantienen esa condición subordinada las demás sociedades del grupo, pero ahora ya solo serán acreedores subordinados los socios comunes, es decir, quienes tengan participaciones significativas tanto en la sociedad insolvente, como en alguna otra sociedad del grupo. Es decir, no serán créditos subordinados aquellos que ostenten los socios de las otras sociedades del grupo, ni siquiera cuando tales socios resulten titulares de participaciones significativas.